

La "quemada" de Arias Navarro

FERNANDO GONZALEZ

EN una época sospechosamente propicia —coincidiendo con el llamado "desmantelamiento" de la Secretaría General del Movimiento—, *The Economist* lanzaba la noticia de que Carlos Arias Navarro, por orden de Franco, controlaba las conversaciones telefónicas de sus ministros e incluso del entonces príncipe Juan Carlos. La noticia no puede haber sorprendido a ningún español. Los servicios especiales de seguridad trabajaban con extraordinaria impunidad, dadas las excepcionales características de la dictadura española.

Naturalmente, Ray Alan, supuesto autor del reportaje, silencia sus fuentes informativas. El semanario "ultraconservador" británico tiene ya suficientes años de experiencia como para saber dosificar una manipulación política de tal envergadura. Hay que aclarar que cae dentro del terreno de lo probable que Arias Navarro —fiscal, militar jurídico, de larga trayectoria en acciones represivas en el franquismo, notario de Madrid— ordenase la vigilancia permanente y "escucha" de sus más íntimos colaboradores. Hasta el momento de entrar estas líneas en máquinas no se ha producido ningún tipo de contestación por parte del ex presidente de Franco y de la Corona. Los intentos de los redactores de *El País* para contactarlo en El Escorial acabaron con el repudio por parte de miembros de la guardia del ex presidente. Carlos Arias Navarro, acosado por los reporteros, penetró insólitamente por la puerta de servicio del hotel Victoria Palace. Hace un año se dirigía por RTVE a los españoles demandando: "Sugerir iniciativas al Gobierno y a participar en los asuntos públicos". Semanas más tarde caía arrastrando en su fracaso al primer intento reformista.

En una dictadura toda precaución es poca. A nadie puede parecer extraño que uno de los hombres clave en el desarrollo de los últimos años del franquismo activase a los Servicios de Documentación de Presidencia del Gobierno (SDPG). Una herencia que legó Carrero Blanco al sufrir el atentado, precisamente cuando Arias Navarro era ministro de Gobernación y, en cierta medida, responsable de la seguridad del almirante. Si el descubrimiento de las "escuchas" telefónicas no parece sospechoso, si lo es, y mucho, la

plataforma que se ha utilizado para su difusión. Tanto *The Economist* como el momento histórico que se ha conjugado resultan demasiado oportunistas como para que la opinión pública se conforme con una simple lectura de las revelaciones de Ray Alan.

Tres circunstancias han concurrido en las últimas semanas para el lanzamiento de la noticia: La "desaparición" del Movimiento (en definitiva, una acción de enmascaramiento de toda una maquinaria de poder perfectamente útil aún). La presión insostenible para la legalización del PCE y, como consecuencia, de los demás partidos en entredicho, y, ya en un plano internacional, pero perfectamente interrelacionado con el proceso español, el cambio de actitud del Presidente Carter respecto al "eurocomunismo" (lo que arrastraba, a su vez, una nueva política con la URSS, nuevas negociaciones SALT y una reconversión de los países "amigos"). Dentro de este amplio marco, *The Economist* ha jugado decisivos papeles. No sólo ahora y en el continente europeo, sino también, y en diversos momentos de tensión, en Latinoamérica y África.

Chile, Portugal y Angola son tres hitos fundamentales en la historiografía de Robert Moss, director y manager de *The Economist*. En cada país Moss ha obtenido resultados concretos, aunque también diversos. Su vinculación perfectamente definida a determinado servicio de información norteamericano (ha sido acusado oficialmente en los Estados Unidos de colaborar estrechamente con la CIA) hace que el anatema de su semanario a la dictadura española adquiera nuevos matices. Frecuentemente en los últimos años del franquismo era utilizado *The Economist* como instrumento de contraste exterior. *The Economist*, en Gran Bretaña; *L'Aurore*, en Francia, e *Il Giornale*, en Italia, eran tres plataformas de la extrema derecha que el "Régimen" aireaba con machacona frecuencia. La campaña del semanario británico para asentar a Fraga Iribarne como demócrata —un "ministro liberal", le llamaba— a la muerte de Franco puede dar una idea concreta de la variada actividad política de Robert Moss.

El dinero de la CIA

A pesar de "la campaña de los derechos humanos", el Presidente

Carter tuvo que enfrentarse con la realidad de la política exterior norteamericana. No solamente la herencia de Nixon-Ford, sino también la presión de las posturas de intransigentes en el Congreso. Una parte no desdeñable de la herencia Nixon era el primer Gobierno de la Corona en España y su fracaso, prácticamente una continuación del franquismo que en los últimos tiempos tímoneaba Henry Kissinger. Existía ya, en el momento de la toma de posesión de Carter, otro Gobierno en España —una segunda oportunidad— a la que "salvar"...

Entre las realidades en la política exterior de Washington estaban —y están— los sobornos institucionalizados. "No veo nada ilegal e impropio en los pagos secretos de importantes cantidades de dinero por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al Rey Hussein de Jordania y a otros dirigentes extranjeros...", reconocía Carter hace apenas un mes. El mantenimiento de "países amigos" supone una gravosa e inevitable carga para el contribuyente norteamericano.

Antes de su viaje a Moscú —considerado posteriormente co-

mo un fracaso—, Cyrus Vance remachaba que los pagos de la CIA "eran normales". Por su parte, Hussein, uno de los personajes más "quemados" en beneficio de la inteligencia norteamericana, reconocía que esos pagos durante años de fuertes cantidades de dólares "eran para ampliar nuestras capacidades de defensa y espionaje" (*"Newsweek"*, febrero de 1977). Quedaba claro que el mantenimiento de la "normalidad" suponía un desembolso anual de los servicios secretos norteamericanos. Simultáneamente, en el Congreso —una comisión especial que investigaba las actividades de la CIA en el período Nixon— reconocía que la financiación del libro de Robert Moss, *"Libro negro sobre Salvador Allende"*, había costado gruesas sumas a la CIA, aunque al parecer había colaborado la Junta chilena en su producción. Varios miles de ejemplares traducidos fueron distribuidos oportunamente por Pinochet en Chile.

La labor "estabilizadora" de Robert Moss quedaba, por una indiscreción, al descubierto. Pero sus actividades eran ya anteriores a la caída de Allende. Toda la labor "desestabilizadora" sobre Chile en

